

PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.

Las Leyes y demás disposiciones de carácter oficial, son obligatorias por el solo hecho de publicarse en este periódico.

TOMO LXX.

PACHUCA DE SOTO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 1937.

NUM. 35

CONDICIONES:

Este periódico se publicará los días 1º, 8, 16 y 24 de cada mes.
Las subscripciones se reciben en la Administración de Rentas de cada Distrito y el precio de cada número será de diez centavos, por subscripción semestral.
Los números sueltos o atrasados, valen veinte centavos, se expenden en las Administraciones de Rentas.

DIRECCION:

LA SECRETARÍA GENERAL.

Registrado como artículo de 2a. clase
con fecha 23 de septiembre de 1931.

CONDICIONES:

Los remitidos y avisos se dirigirán a la dirección de este periódico y según su clase se insertarán gratis o a precios convencionales, conforme a los artículos 110 y 111 de la ley orgánica de Hacienda.—Los avisos, edictos, etc., etc., que se remitan de cualquier punto del Estado, no se publicarán si no vienen acompañados del certificado de entero hecho en la respectiva Administración o Recaudación de Rentas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER EJECUTIVO

10166

JAVIER ROJO GOMEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED:

Que la H. XXXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente

“DECRETO NUMERO 423.

El H. XXXIV Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

Artículo 1º—Para los efectos del artículo 27 fracción 7ª de la Constitución General de la República se considerarán como causas de utilidad pública que dan origen a la expropiación, las siguientes:

I.—El establecimiento, explotación o conservación de un servicio público.

II.—La apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y sub-urbano.

III.—El embellecimiento, ampliación y saneamiento de las poblaciones, la construcción de Hospitales, Escuelas, Parques, Jardines, Campos Deportivos y de cualquiera otra obra destinada a prestar servicios de beneficio colectivo.

IV.—La conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos y de las cosas que se consideren como características notables de nuestra cultura nacional.

V.—El abastecimiento de las ciudades o centros de población, de viveres o de otros artículos de consumo necesario y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootia, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas.

VI.—Los medios empleados para el mantenimiento de la paz pública.

VII.—La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación.

VIII.—La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general.

IX.—La creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad.

X.—Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad.

XI.—La creación o mejoramiento de centros de po-

blación y de sus fuentes propias de vida, así como proporcionarles las tierras y construcciones necesarias para dicho objeto.

XII.—Los demás casos previstos por leyes especiales.

Artículo 2º—En los casos comprendidos en la enumeración del artículo primero, previa declaración del Ejecutivo del Estado, procederá a la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la simple limitación de los derechos de dominio para los fines del Estado o el interés de la colectividad.

Artículo 3º—El Ejecutivo del Estado tramitará por conducto del Departamento correspondiente, el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio y en su caso hará la declaratoria respectiva.

Artículo 4º—La declaratoria a que se refiere el artículo anterior se hará mediante acuerdo que se publicará en el Periódico Oficial del Estado y será notificado personalmente a los interesados.

En caso de ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación del acuerdo en el mencionado Periódico.

Artículo 5º—Los propietarios afectados podrán interponer dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo, recurso administrativo de revocación contra la declaratoria correspondiente ante el Ejecutivo del Estado.

Artículo 6º—El recurso administrativo de revocación se interpondrá ante el Departamento que haya tramitado el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de domicilio.

Artículo 7º—Cuando se haya hecho valer el recurso administrativo de revocación a que se refiere el artículo 5º o en el caso de que éste haya sido resuelto en contra de las pretensiones del recurrente, la autoridad administrativa que corresponde procederá desde luego a la ocupación del bien de cuya expropiación u ocupación temporal se trate o impondrá la ejecución inmediata de las disposiciones de limitación de dominio que proceda.

Artículo 8º—En los casos a que se refieren las fracciones V, VI y X del artículo 1º de esta Ley, el Ejecutivo del Estado, hecha la declaratoria, podrá ordenar la ocupación de los bienes objeto de la expropiación o de la ocupación temporal o imponer la ejecución inmediata de las disposiciones de limitación de dominio, sin que la interposición del recurso administrativo, de revocación suspenda la ocupación del bien o bienes de que se trate o la ejecución de las disposiciones de limitación de dominio.

Artículo 9º—Si los bienes que han originado una declaratoria de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio no fueren destinados al fin que dió causa a la declaratoria respectiva, dentro del término de cinco años, el propietario afectado podrá reclamar la reversión del bien de que se trata, o la insubsistencia del acuerdo sobre ocupación temporal o limitación de dominio.

Artículo 10.—El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

Artículo 11.—Cuando se controvierta el monto de la indemnización a que se refiere el artículo anterior, se hará la consignación al juez que corresponda, quien fijará a las partes el término de tres días para que designen sus peritos, con apercibimiento de designarlos el juez en rebeldía, si aquellos no lo hacen. También se les prevendrá designen de común acuerdo un tercer perito para el caso de discordia, y si no lo nombraren, será designado por el Juez.

Artículo 12.—Contra el auto del juez que haga la designación de perito, no procederá ningún recurso.

Artículo 13.—En los casos de renuncia, muerte o incapacidad de alguno de los peritos designados, se hará nueva designación dentro del término de tres días por quienes corresponda.

Artículo 14.—Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que deba nombrarlo y los del tercero por ambas.

Artículo 15.—El juez fijará un plazo que no excederá de sesenta días para que los peritos rindan su dictamen.

Artículo 16.—Si los peritos estuvieren de acuerdo en la fijación del valor de las mejoras o del demérito, el juez de plano fijará el monto de la indemnización; en caso de inconformidad, llamará al tercero, para que dentro del plazo que le fije, que no excederá de treinta días, rinda su dictamen. Con vista de los dictámenes de los peritos, el juez resolverá dentro del término de diez días, lo que estime procedente.

Artículo 17.—Contra la resolución judicial que fije el monto de la indemnización, no cabrá ningún recurso y se procederá al otorgamiento de la escritura respectiva que será firmada por el interesado o en su rebeldía por el juez.

Artículo 18.—Si la ocupación fuere temporal el monto de la indemnización quedará a juicio de peritos y a resolución judicial, en los términos de esta Ley. Esto mismo se observará en el caso de limitación de dominio.

Artículo 19.—El importe de la indemnización será cubierto por el Estado, cuando la cosa expropiada pase a su patrimonio.

Cuando la cosa expropiada pase al patrimonio de persona distinta del Estado, esa persona cubrirá el importe de la indemnización.

Estas disposiciones se aplicarán, en lo conducente, a los casos de ocupación temporal o de limitación al derecho de dominio.

Artículo 20.—La autoridad expropiante fijará la forma y los plazos en que la indemnización deberá pagarse, los que no abarcará nunca un período mayor de diez años.

TRANSITORIO.

Esta Ley empezará a surtir sus efectos desde el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Al Ejecutivo del Estado para su sanción y cumplimiento.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Pachuca de Soto, a los trece días del mes de septiembre de mil novecientos treinta y siete.—Dip. Presidente, *Francisco M. Austria*.—Dip. Srio., *Armando Martínez*.—Dip. Srio., *Felipe Sánchez*.—Rúbricas”.

Por tanto, mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los quince días del mes de septiembre de mil novecientos treinta y siete.—El Gobernador Constitucional del Estado, *Lic. Javier Rojo Gómez*.—El Secretario General, *Lic. Manuel Yáñez*.

10164

JAVIER ROJO GOMEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED:

Que la H. XXXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, ha tenido a bien expedir el siguiente

“DECRETO NUMERO 424.

El H. XXXIV Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo, decreta:

Artículo 1º—Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que contrate un empréstito hasta por la cantidad de 5,000,000.00 -cinco millones de pesos- moneda nacional, que se invertirá en la realización de un programa general, de caminos del Estado y especialmente en la construcción del camino Pachuca-Huejutla Tampico-Tamazunchale.

Artículo 2º—El empréstito autorizado en el artículo anterior se lanzará por medio de títulos que se denominarán “Bonos de Caminos del Estado de Hidalgo”, los cuales ganarán 3½% -tres y medio por ciento- semestral de interés y se colocarán a un tipo no inferior al 95% -noventa y cinco por ciento- de su valor nominal, en una o varias series, según se determine en las actas de emisión correspondientes, en las que se estipulará todo aquello que el Ejecutivo crea conveniente para la mejor realización de la emisión y para la debida constitución de sus garantías.

Artículo 3º—Los Bonos serán amortizados en un plazo máximo de 30 treinta pagos semestrales que comprenderán capital e intereses, calculados a las tasas indicadas por el método de anualidades.

Artículo 4º—Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en garantía del pago puntual del servicio de amortizaciones y réditos del empréstito a que se refiere esta Ley, así como de las cantidades que en cualquier forma se considere conveniente reservar para mejor uso de la emisión y para mayor seguridad del pago de las amortizaciones de los Bonos, afecte las participaciones que corresponden al Gobierno del Estado en los impuestos federales sobre el consumo de gasolina y hasta en una cantidad de \$ 100,000.00 anuales en la que corresponde por producción y consumo de energía eléctrica establecidos en las leyes vigentes o que establezcan disposiciones futuras que sean aplicables, así como para otorgar mandato irrevocable en favor del Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., para que perciba dichas participaciones, de las cuales tomará las cantidades a que se refiere este artículo y las restantes las entregará al Gobierno del Estado para los fines generales de la administración.

Artículo 5º—El Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, S. A., se encargará de la administración de los fondos del empréstito, entregando las cantidades que se obtuvieren de la colocación de los Bonos a la Junta Local de Caminos a medida que se vayan desarrollando los trabajos de construcción y vigilará que la inversión de esos fondos se ajuste exactamente a los planos y especificaciones aceptados. Al efecto, la Institución Fiduciaria, a su juicio podrá:

I.—Exigir a los contratistas los planos y proyectos de las obras.

II.—Inspeccionar, cuantas veces lo considere necesario, los trabajos de campo y gabinete, teniendo facultades para revisar, en cualquier momento, las estimaciones y las obras mismas, para lo cual los contratistas y autoridades que intervengan, deberán darle toda clase de facilidades.